

ANTONIO
ELORZA

La transición ha posibilitado un periodo
de prosperidad y libertad inédito en la
historia de España. Esta es la crónica de
las condiciones que hicieron posible la
transformación de un régimen autoritario.

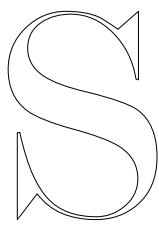
20

LETRAS LIBRES
OCTUBRE 2015

Una historia inacabada

ANTONIO ELORZA

ilustraciones
RAÚL ARIAS

uele afirmarse que la transición española surgió del encuentro de dos debilidades: la de la izquierda, y en particular la del Partido Comunista (PCE), incapaz de cumplir el sueño de la huelga nacional pacífica que acabaría con la dictadura, y la del propio régimen, incapaz de encontrar una fórmula viable de continuidad a la muerte del caudillo.

Favorecida por el marco mundial de la Guerra Fría, donde Franco asumió el papel de “centinela de Occidente”, la prolongada supervivencia del régimen tuvo también mucho que ver con la despiadada represión que se extendió desde 1936 hasta los años cincuenta. A su servicio, una policía técnicamente anticuada, pero dispuesta a actuar con métodos nazis, más el bastión seguro del ejército, bastaron para anular las expectativas de los pequeños grupos democráticos o de la movilización de masas anunciada por el PCE.

Había, no obstante, un rasgo característico de la actuación política de Franco que resultó beneficioso para la transición democrática: la personalización del poder, especialmente en el plano militar. El franquismo nunca fue un pretorianismo. Aumentó la pluralidad de centros de decisión: tres ministerios, ocho capitanías generales, un jefe operativo de Estado Mayor. Fragmentación que había de resultar decisiva cuando el rey Juan Carlos quedó al frente del entramado y hubo de resolver el intento fallido del golpe de Estado de 1981, el 23-F. Como el mismo monarca

me relató en julio de 1988, no faltaba voluntad insurreccional entre los principales mandos militares, sino acuerdo entre ellos.

Otro tanto cabe decir de la absoluta personalización del poder en el plano político. El régimen autoritario supone la existencia de un subsistema político de un pluralismo limitado, bajo el líder, susceptible de incorporar de modo activo distintas corrientes políticas y, llegado el caso, sentar los supuestos para el reemplazo del jefe supremo. El modelo del PRI había de proporcionar el mejor ejemplo, y por ello los jóvenes posfranquistas de los años setenta viajaron a México para aprender. Solo que si Franco estaba siempre listo para aplastar a la oposición democrática, su concepto del mando le vetaba toda concesión al pluralismo.

Otro mal que en definitiva tuvo positivas consecuencias fue la debilidad de una oposición democrática y obrera que desde muy pronto percibió que el cambio de régimen tenía como precondition una voluntad de entendimiento entre socialistas y demócratas de varia procedencia, catalanistas y nacionalistas vascos. El PCE también participó en la carrera democrática, si bien en inferioridad desde la salida y bajo la impresión de que su predominio sería un auténtico peligro de muerte para la transición. Por añadidura, con la libertad llegó la crisis económica. El PCE y la confederación sindical Comisiones Obreras —protagonistas de unas luchas reivindicativas que en los últimos diez años mejoraron sustancialmente el nivel de vida de los trabajadores— supieron sacrificarse al asumir las restricciones económicas impuestas en los Pactos de la Moncloa a fines de 1977. Su puesto fue ocupado por un Partido Socialista Obrero Español



(PSOE) sumamente débil al principio. Con Felipe González a su cabeza, los nuevos grupos de dirigentes renovaron el partido, apoyándose sobre unas siglas y una imagen favorable de la socialdemocracia en Europa. Fue este un fenómeno compartido por otros grupos de oposición, cuyas direcciones históricas, a cuarenta años de la Guerra Civil, avalaron la legitimidad de la nueva democracia, sin interferir en la renovación. La excepción correspondió al PCE, con una carga excesiva de veteranos, empezando por Dolores Ibárruri, Pasionaria, y el propio Santiago Carrillo, que produjo una obsolescencia política de los cuadros dirigentes, muchos de los cuales volvían con cuatro décadas de atraso ideológico a sus espaldas.

La voluntad de entendimiento y la conciencia de fragilidad fueron dos de los pilares sobre los cuales se levantó el régimen democrático. A modo de soporte, la economía había sido un factor decisivo a la hora de ampliar la base social del cambio, a partir de una conciencia generalizada de los beneficios aportados por la progresiva integración económica en Europa. Los principales capitalistas no eran particularmente adictos a la democracia y temían que como en Portugal el fin de la dictadura abriese la puerta a fuertes presiones obreras, pero al mismo tiempo percibían que sin democracia el mercado europeo se hallaba comprometido. La inversión de la coyuntura en la segunda mitad de los setenta solo se superó mediante los Pactos de la Moncloa. Los trabajadores aceptaron una drástica regulación de salarios, gracias a la cual se pudo controlar una inflación galopante, a cambio del reconocimiento de derechos sociales. Igualmente hubo grandes concesiones por la parte democrática en la Ley de Amnistía,

que bloqueó todo castigo a los crímenes franquistas, a cambio de que se aplicara también a presos demócratas y sindicalistas. La fuerza residual del pasado régimen, centrada en el ejército, hacía de esa concesión una exigencia para evitar la puesta en marcha de un golpe de Estado.

A pesar de todo, la fragilidad estaba ahí. El avance sustancial de los niveles salariales y de consumo logrados en el tardofranquismo se vio transitoriamente anulado, la democracia no trajo consigo el fin de ETA, y tampoco de las violaciones recurrentes de derechos humanos por parte de la policía y la Guardia Civil. Además el terrorismo vasco contribuía a la radicalización de la mentalidad anticonstitucional en amplios sectores del ejército. Estaba en proceso de disgregación la Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, que había servido de puente entre el franquismo reformista y el orden constitucional, destacados intelectuales hablaban de “desencanto”, e incluso el rey hacía eco del malestar y de la oposición militar a Suárez. “He dado una patada a la corona, está en el aire y ya veremos dónde cae”, dijo Juan Carlos la noche del 23-F a su hijo, el entonces príncipe de Asturias. La polémica sobre su comportamiento continúa, pero lo cierto es que a fin de cuentas el rey detuvo el golpe y la masiva respuesta en la calle de los españoles sirvió de plataforma a una consolidación democrática, culminada en la gran victoria electoral del PSOE, el 28 de octubre de 1982.

En el plano cultural, el franquismo estaba agotado desde los movimientos universitarios de 1956, lo cual no significa que la *intelligentsia* encontrase un lugar satisfactorio ante las exigencias de cambio. *Señas de identidad* de Juan Goytisolo fue el emblema de ese momento de insatisfacción. La adhesión al cambio político era inevitable, pero no dejó de experimentar desajustes por la distancia entre los sueños y la realidad; de ahí la epidemia transitoria del desencanto. Se reprodujo además un fenómeno ya presente en la primera mitad del siglo, y que había dado lugar al protagonismo y a la exaltación de José Ortega y Gasset: la pobreza del lenguaje político llevó a primera fila a los intelectuales, que cubrieron ese vacío. El papel desempeñado por *El País* y por Fernando Savater responde a esa situación. A pesar de todo, la libertad produjo sus frutos, tanto en la creación literaria como en el ensayo y en la producción cinematográfica. La carga acumulada desde los años sesenta, en autores y en temas, dio lugar a ese desarrollo.

En los espacios exteriores a la alta cultura, el fin del franquismo registró un grado mucho mayor de eco popular, si bien en algunas de sus manifestaciones fuera el simple reflejo de las frustraciones acumuladas. Tras cuatro décadas de censura eclesiástica, los hombres españoles tenían auténtica ansia de ver mujeres desnudas, y al mismo tiempo de reivindicar una virilidad enfrentada con el reto de la apertura moral. El “destape” y el “landismo” fueron la expresión del ajuste de la mentalidad machista tradicional al cambio. Pero las tensiones acumuladas propiciaron también un auténtico estallido, con la aparición de una contramoral no exenta de rasgos conservadores bajo la superficie. La forma, sin embargo, fue estridente. En el concurso pornográfico que tiene lugar en la primera película de Almodóvar (*Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón*), a la reivindicación democrática de “elecciones generales” se opone la alternativa de “erecciones generales”.

La *movida* madrileña fue la expresión más vibrante de esa ruptura en definitiva controlada. Como en los argumentos de Almodóvar, la suma de provocaciones a la moral tradicional no impedía la inevitable restauración final del orden.

Un reajuste similar fue alcanzado, incluso tras la incidencia de una depresión económica transitoria en los noventa, y a pesar de la presencia del terrorismo de ETA, con las sucesivas perturbaciones en la trayectoria ascendente que corresponde a los gobiernos de Felipe González (1982-1996) y de José María Aznar (1996-2004). El tema de la OTAN se resolvió según un procedimiento estrictamente democrático y las cuatro huelgas generales soportadas por el gobierno socialista fueron ante todo la prueba de que la democracia presidía asimismo las relaciones de trabajo. El único obstáculo al avance de la modernización general llegó por parte del terrorismo de Estado, que se sirvió de los malos usos de la policía “social” y de la Guardia Civil bajo el franquismo, y que con la sucesión de crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación contra ETA comprometió seriamente al Estado de derecho. Dio lugar además un proceso de degradación moral, al justificar los crímenes por razón de Estado, que alcanzó a demócratas por encima de toda sospecha. El descubrimiento de estos grupos y su fracaso técnico acabaron por fortuna con el episodio. Lo que venía también del pasado, y que no solo permaneció como rasgo indeleble de la política española en su relación con la economía, fue la corrupción.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 pusieron a prueba tanto la capacidad de la sociedad española para asumir serenamente el dolor, como la escasa preparación de las élites para entender y explicar el terrorismo islámico. De Juan Goytisolo al nuevo jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), se sucedieron los eximentes y los llamamientos a no asociar lo ocurrido con el yihadismo. “Pueden arder las mezquitas”, me decía el responsable de opinión en un conocido diario. Más bien ardió la fama del expresidente Aznar, por la insistencia en cargar a ETA con la culpa y por su política de respaldo a Bush. De nuevo hubo suerte en lo esencial: los expertos en información y una policía especializada impidieron desde entonces nuevos golpes yihadistas.

El *boom* económico parecía imparable, sin percibir casi nadie que la burbuja del ladrillo recordaba a escala reducida la dinámica de la crisis del 29. De momento Rodríguez Zapatero acertaba al recoger el mensaje social de la modernización, y las leyes sobre el aborto y el matrimonio homosexual, desbordando a otras socialdemocracias europeas, generaron un halo de entusiasmo en torno a su figura (el documental *Viva Zapatero!* difundido en Italia). Solo que en los problemas graves sus decisiones debían más a la confianza en sí mismo que al análisis, con el riesgo de producir solo fuegos artificiales (como lo sucedido con la Alianza de Civilizaciones) o problemas políticos insolubles (como la negociación con ETA, zanjada finalmente por la intransigencia de la propia dirección etarra). La eficacia policial y la colaboración con Francia resolvieron entonces el problema al margen de las iniciativas arbitristas del presidente.

Como en la fábula de la lechera, Zapatero se dejó llevar por un optimismo, según el cual, a estas alturas, el PIB español habría ido superando el de países como Alemania

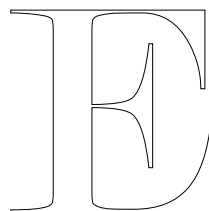
y Francia. Por eso, en 2008 tuvo que prohibir al PSOE y a medios afines pronunciar incluso la palabra maldita: crisis. En el debate electoral de ese año, el ministro Solbes dio una lección de eficacia propagandística y de encubrimiento de la realidad. Tampoco las críticas del Partido Popular (PP) ayudaron mucho, porque en definitiva los suyos participaban del *boom* del ladrillo y de la corrupción, la cual —como probó un artículo magistral, “Esto funciona así” de Fernando Jiménez y Vicente Carbona, publicado en el número de febrero de 2012 de la edición española de esta revista— envolvió a los dos partidos en los niveles autonómico y local. Y al PP en su centro de poder, sin que debamos olvidar los ERE, el procedimiento de las empresas para obtener autorización para despedir trabajadores. El descenso a los infiernos resultó inevitable, con los indignados como portavoces de una justificada repulsa al modo vigente de hacer política, si bien una vez más la sociedad española, en medio de un haz de crisis —económica, política, territorial—, parece dispuesta a remontar. Entramos, no obstante, en el terreno de las profecías. —

ANTONIO ELORZA (Madrid, 1943) es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid —en donde imparte historia del poder— e historiador del pensamiento político. Su libro más reciente es *Anarquismo y utopía* (Cinca, 2013).

Los pasos perdidos

La construcción de la democracia española ha sido un éxito, pero no ha estado exenta de errores. Desde la educación hasta la cultura política, este ensayo señala algunos problemas y apunta posibles reformas.

**MANUEL ARIAS
MALDONADO**



En un lapso de tiempo asombrosamente breve, España ha pasado de ser considerada un éxito a tenerse por un fracaso: si encarnábamos una democratización ejemplar, ahora simbolizamos su reverso fallido.

Sobre todo, a ojos de los propios españoles, cuya autoestima ha sufrido un *bust* paralelo al de su economía. ¡Todo era mentira! Aunque bien podría tratarse de un efecto óptico pasajero que no hace justicia a los avances experimentados por una democracia